

Desigualdad social y pobreza en América Latina: una crítica al enfoque de los organismos internacionales.

AUTOR: Msc. Blanca Munster Infante.

INTRODUCCIÓN.

Las reflexiones sobre los vínculos entre desarrollo y desigualdad social no son nuevas en América Latina. Todo lo contrario, podría afirmarse que toda teoría interesada en los temas del crecimiento económico y del desarrollo de la región contuvo necesariamente, una explicación sobre las causas de la inequidad y un pronóstico sobre el comportamiento y la evolución de los sectores desposeídos.

Hacia mediados del siglo XX las ciencias sociales comprobaron que la urbanización y el avance de la industrialización no garantizaban el bienestar de toda la población. Se comenzó a utilizar el concepto de marginalidad con el objetivo de explicar los enclaves de pobreza que tendían a consolidarse en lugar de desaparecer. La inquietud perfiló dos grandes paradigmas: el primero vinculado con el funcionalismo, intentó comprender los patrones culturales que subyacían al comportamiento de los marginales, el segundo, bajo la influencia del marxismo, concibió la marginalidad como un fenómeno típico del capitalismo dependiente.

Durante los años 60 y 70, la polémica entre ambos enfoques alimentó una extensa literatura. Luego, el término marginalidad fue paulatinamente relegado a un segundo plano, mientras que las preocupaciones sobre la informalidad ganaban espacio en los debates académicos de los 80. Para todas ellas, el carácter lineal del desarrollo como movimiento capaz de atenuar de modo progresivo las desigualdades sociales había sido refutado. Los debates actuales se entremezclan con términos (heterogeneidad estructural, exclusión y pobreza) que han contribuido a complejizar y, a la vez a fragmentar las discusiones.

Con el agotamiento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones y la crisis de la deuda, comenzó a perfilarse una perspectiva alentada, no ya por las ciencias sociales locales, sino por los organismos internacionales de crédito.

Resumido en un conjunto de postulados que asignaba al Estado la responsabilidad de la crisis, el Consenso de Washington sirvió de matriz privilegiada para decodificar la realidad latinoamericana y operar sobre ella. Bajo su égida se llevaron a cabo

sucesivos planes de ajuste, con la certeza de que era suficiente estabilizar la economía, liberalizarla y privatizarla para retomar el crecimiento. Desde luego, la prioridad de la economía en la agenda política de los gobiernos, ignoró inicialmente los costos sociales de las reformas. Años después, sus efectos sociales negativos eran ya indiscutibles.

Enmarcado en lo que algunos autores denominan la "segunda generación" de las reformas, el pensamiento de los organismos internacionales comenzó a incorporar a sus imperativos macroeconómicos, análisis destinados a definir estrategias para aliviar los impactos sobre las condiciones de vida de la población. Así, sus reflexiones académicas y técnico-políticas desembocaron en el mismo dilema planteado 40 años atrás: la persistente contradicción entre crecimiento económico y equidad.

Por lo que nos interesa comparar diversas perspectivas sobre el fenómeno, perspectivas, cuyo valor radica más en sus consecuencias prácticas que en sus aportes académicos. Nos interesa determinar de qué modo la "cuestión social" es pensada por los principales organismos internacionales e indagar si sus diagnósticos y sugerencias confluyen o se diferencian.

Las ideas presentadas por los organismos internacionales tienen poder en cuanto estructuran consensos y orientan políticas en toda la región. En este trabajo serán revisados dos Informes recientes consagrados al estudio de la desigualdad, el primero del Banco Mundial "Informe sobre el Desarrollo Mundial 2000/2001" con un carácter global y el segundo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) "América Latina frente a la desigualdad", con una perspectiva regional.

PUNTO DE PARTIDA: LA SITUACIÓN SOCIAL

En América Latina, específicamente se han producido grandes cambios en el contexto macroeconómico, a partir de la crisis de la deuda externa. Estos cambios, con algunas diferencias entre los distintos países de la región se instrumentaron en programas de estabilización y en posteriores programas de ajuste estructural, que situaban con un marcado énfasis la estabilidad de las variables macroeconómicas (como el crecimiento del PIB, tasa de inflación o déficit fiscal). Ya a comienzos de la década de los noventa, los indicadores macroeconómicos parecían comportarse correctamente, según la lógica de las instituciones financieras internacionales; pero estos aparentes buenos resultados

no parecen ser tan positivos, si se analizan las condiciones sociales existentes.

Así, y teniendo en cuenta la información disponible, se observa en general un empeoramiento en la distribución del ingreso. En América Latina, el 20% más rico de la población se apropia de 17 380 dólares como promedio anual y el 20% más pobre sólo tiene acceso a 933 dólares

En cuanto al empleo generado en el decenio de los noventa correspondió en su mayor parte al sector informal (7 de cada 10 nuevas plazas ocupacionales), el número de personas ocupadas en los sectores informales o de baja productividad alcanzó en 1999 a cerca del 50% de la fuerza de trabajo en las zonas urbanas y porcentajes aún más elevados en las zonas rurales, además el desempleo se elevó a 8,7% en 1999, la tasa más alta del decenio.

En las áreas urbanas de la región se estiman que unos 18 millones de personas están sin trabajo. A su vez la tasa de desempleo entre los hombres aumentó más que la de las mujeres, al pasar de 7,2% en la primera mitad de 1998 a un 8,2% al primer semestre de 1999, el desempleo entre las mujeres se elevó a 10,2% comparado con 9,5% en el mismo período.

El aumento de la flexibilidad en los mercados de trabajo acentuó la precariedad e inestabilidad de los empleos y a esto se sumó la disminución del acceso a la seguridad social. En la mayoría de los países de la región más de la mitad de los adultos mayores no tiene pensión de vejez.

La OIT señala que el salario real en el sector industrial de América Latina y el Caribe cayó 0,9% en el primer semestre de 1999 frente a igual período un año antes. También es considerable la ampliación de la brecha de remuneraciones entre trabajadores calificados y no calificados, que se ha acrecentado entre el 18% y el 24% como promedio para la región. Al mismo tiempo se ha producido la declinación del porcentaje de asalariados urbanos formalmente afiliados a algún sistema de seguridad social. Entre 1990 y 1998 esta cifra disminuyó de un 67 % a un 62 %.

En el caso de América Latina, según el estudio realizado en el Informe “La brecha de la equidad” se señala que, el número de pobres alcanzó 224 millones de personas y 90 millones la cantidad de indigentes. El porcentaje de hogares pobres aumentó hasta la cifra de un 38 %.

Del total de pobres, el 52% son niños y adolescentes, cerca de 39 millones tienen entre 0 y 5 años de edad, y 43 millones, entre 6 y 12 años. Esto lleva a preguntarse si la región podrá cumplir la meta de reducir la pobreza en un 50% para el 2015, como se acordó en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social.

En la esfera educacional, se ven afectadas las tasas brutas de ingreso escolar por una serie de factores como son la matrícula tardía, la repitencia y la deserción escolar, por lo que disminuye el número de niñas y niños que terminan la educación primaria. En toda la región se estima que del 20 % de los niños y niñas que se matriculan tarde en el sistema escolar, el 42 % repite el primer grado y el 30 % repite segundo. La tasa promedio de repitencia en todos los grados primarios está alrededor del 30%.

En cuanto a la salud, el promedio de mortalidad de menores de 5 años era de 39 por 1000 nacidos vivos en 1998, pero este promedio oculta diferencias, tanto entre los países como al interior de ellos donde las tasas de mortalidad y de morbilidad son más altas en áreas rurales y entre grupos de bajos ingresos. Se estima que al final de la década entre el 20% y el 50% de las poblaciones urbanas de la región permanecerá sin acceso a servicios de saneamiento. En las áreas rurales, el 50% de la población no tiene acceso alguno al suministro de agua potable, y más del 60% no puede acceder a servicios de saneamiento.

La mortalidad materna promedio en América Latina es de 190 muertes maternas por 100 000 nacidos vivos. Si se tuvieran en cuenta los casos no registrados, se estima que esta cifra sería un 40% más alta. Más de medio millón de madres sufren de problemas crónicos de salud que provienen de la asistencia inadecuada durante el embarazo y el parto.

Uno de los factores que más ha incidido en la disminución de la esperanza de vida ha sido el impacto causado por el VIH-SIDA. Este virus afecta principalmente a los pobres. Se estima que 33.4 millones de personas, viven con el VIH, causante del SIDA, de estos 1.4 millones están en América Latina y 330 000 en el Caribe. Las tasas de infección de VIH son superiores en el Caribe que tiene la segunda tasa más alta de incidencia en el mundo después de África Subsahariana.

Ante esta crítica situación social, se replantea el lugar y el papel de las políticas económicas y sociales, como instrumentos para luchar contra la pobreza y el próximo

paso será analizar como se expresan esos cambios en las propuestas de diferentes instituciones internacionales.

EI BANCO MUNDIAL: EL DIAGNÓSTICO

En el caso del informe del Banco Mundial, se examinan las causas de la pobreza y las respuestas de los gobiernos, a partir de la experiencia de los noventa en Asia oriental y las crisis anteriores de América Latina y África.

El Banco Mundial estima que para investigar las causas de la pobreza es necesario examinar las dimensiones puestas de manifiesto por los mismos pobres:

- ✓ Falta de ingresos y activos para satisfacer sus necesidades básicas.
- ✓ Sensación de impotencia y falta de representación en las instituciones del Estado
- ✓ Vulnerabilidad ante las crisis, debido a la incapacidad de hacerles frente.

Luego se detiene a clasificar los diferentes tipos de activos a disposición de los pobres y su rentabilidad (o productividad) e inestabilidad. Los activos son de diferentes clases:

- ✓ Activos humanos, como la capacidad de desempeñar una actividad laboral básica, los conocimientos especializados, etc.
- ✓ Activos naturales, como la tierra.
- ✓ Activos físicos, como el acceso a la infraestructura.
- ✓ Activos financieros, como el ahorro y el acceso al crédito.
- ✓ Activos sociales, como las redes de enlace y las obligaciones recíprocas a las que se puede recurrir en momentos de necesidad, y la influencia política sobre los recursos.

Tanto la rentabilidad como la estabilidad de los activos de los pobres dependen fundamentalmente del comportamiento de los mercados y de las instituciones estatales y sociales.

BANCO MUNDIAL: LAS RECOMENDACIONES.

Dada la necesidad de ampliar el programa, en el presente Informe se propone un marco general de acción en tres áreas:

- ✓ Oportunidad: hacer llegar las oportunidades económicas a los pobres estimulando el crecimiento y multiplicando sus activos, mediante una combinación de intervenciones en el mercado y en otras esferas.

- ✓ Empoderamiento: conseguir instituciones estatales más dispuestas a rendir cuentas y a tener en consideración las necesidades de los pobres, fortalecer la participación política de éstos en los procesos políticos y en las decisiones locales, y eliminar los obstáculos que se derivan de las diferencias por razón de sexo, etnia, raza y condición social.
- ✓ Seguridad: reducir la vulnerabilidad de los pobres a la mala salud, las crisis económicas, etc. y ayudarles a superar la crisis cuando se produce.

Para el Banco Mundial, dada las importantes relaciones de complementariedad que existen entre esas dimensiones, una estrategia eficaz requerirá intervenciones en los tres frentes, con participación de todos los agentes de la sociedad

En términos de políticas económicas se requiere seleccionar medidas de estabilización que logren sus objetivos macroeconómicos al menor costo posible para los más vulnerables. La política macroeconómica tiene la función de reactivar el crecimiento y, por ende, reducir la pobreza.

Lograr mercados más eficientes para los pobres, que mejoren las condiciones en que éstos participan. Se indica como el alivio de la carga de las reglamentaciones, la flexibilización de las normas laborales y la ampliación de los servicios de microfinanciamiento pueden contribuir a mejorar las condiciones de participación de los pobres en los mercados.

Por otra parte, recomiendan establecer o reforzar redes de protección social que sean capaces de dar seguridades eficaces antes de que se produzca la crisis y de prestar atención una vez que ésta se ha desencadenado. En una situación de corto plazo, la atención se debe concentrar en primer lugar en los programas que ya existen y que pueden ampliarse rápidamente, tales como los de obras públicas y otros programas de protección laboral, que pueden dar empleo a los más pobres y reducir el desempleo abierto, o bien en programas de alimentación de los niños.

"La crisis de Asia oriental y sus repercusiones en otros mercados emergentes brindan al mundo la oportunidad de diseñar un nuevo sistema para hacer frente a las crisis, un sistema que haga del interés de los pobres y los vulnerables el centro de su programa de acción ", afirma Giovanna Prennushi, economista del Banco Mundial. "Al ayudar a los países a establecer sistemas de protección social más eficaces, la comunidad

internacional podría evitar el empobrecimiento repentino de millones de personas cuando estalla una crisis ".

BID:EL DIAGNÓSTICO

Otro documento que desde una perspectiva regional, analiza las causas de la pobreza y la desigualdad, lo constituye el Informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado: "América latina frente a la desigualdad". En dicho documento, en una primera parte se destacan los factores estructurales que generan y reproducen el círculo vicioso de la pobreza: la dotación de recursos de cada país, el tipo de instituciones con que cuenta, la calidad del capital humano y el papel del entorno económico.

El BID reconoce que es en América Latina donde se encuentran las mayores desigualdades de ingreso y las mayores brechas salariales del mundo entre los trabajadores calificados y no calificados. Esta desigual distribución del ingreso ha implicado a su vez, la extensión de la pobreza en la región. Más de 150 millones de latinoamericanos se encuentran por debajo de un nivel de ingreso de 2 dólares diarios, que se considera el mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas de consumo. El Informe considera que si la distribución del ingreso actual de los países latinoamericanos permaneciera sin cambios, el ritmo de reducción de la pobreza sería muy lento, incluso con tasa de crecimiento relativamente elevadas. Según estimaciones del BID con un aumento del ingreso per cápita del 3% anual se requerirían entre 15 y 25 años, dependiendo del país, para reducir a la mitad los niveles de pobreza actuales. Esto es así por la cantidad de pobres que se encuentran muy por debajo del nivel mínimo de ingreso de 2 dólares diarios.

Al analizar los perfiles de la pobreza en América Latina el BID considera que hay cuatro rasgos que distinguen a las familias más pobres: los bajos niveles de educación de sus jefes de hogar, el tipo de trabajo que realizan, su ubicación urbana y el elevado número de hijos. Por lo tanto, las personas que tienen menos instrucción, las que viven en zonas rurales y las que trabajan en actividades primarias, de servicios y de construcción, así como en el sector informal, tienen mayores posibilidades de ser pobres. Además, incluso controlando la influencia de variables tales como el grado de instrucción y otras, las mujeres que trabajan tienen mayores posibilidades de ser pobres que los trabajadores varones.

Al considerar que el factor educativo es un elemento diferenciador de las familias en América Latina, se destaca el problema de que en la región el nivel promedio de la educación de la fuerza de trabajo ha avanzado más lentamente que en otras partes del mundo y que a principios de los noventa no llegaba a los 5 años de escolaridad. Aunque el acceso a la escuela es comparable o superior de otras regiones, los niños de las familias de bajos estratos se retiran rápidamente, esto provoca que la educación se encuentre profundamente estratificada.

LAS RECOMENDACIONES:

Dos argumentos recorren todas las sugerencias del Banco: en primer lugar, la necesidad de asegurar una mayor eficiencia de las políticas públicas y, en segundo la conveniencia de abandonar los postulados progresistas manifiestamente inviables por medidas levemente regresivas pero eficaces. Dicho esto, divide sus sugerencias en 4 grandes grupos: las políticas sociales, laborales, financieras y tributarias o fiscales.

Sin duda, son las medidas sociales las que merecen mayor preocupación e insistencia. En este punto, para el BID, uno de los factores primarios para mejorar la distribución de los ingresos es la participación económica de la mujer.

Teniendo en cuenta que la mujer, es una de las más afectadas por las crisis y la situación económica, el BID señala la necesidad de motivar la actividad femenina, para esto propone aumentar sus niveles educativos, extender los servicios sociales, ampliar los programas de guarderías y salud infantil y velar por su salud reproductiva.

Con respecto a las políticas laborales, el BID corrobora que los regímenes de protección vigentes en la región alcanzan a un sector minoritario de la población. Invita a los formuladores de políticas a profundizar las medidas de flexibilización con el fin de garantizar un balance entre protección, equidad y competitividad a una mayor cantidad de trabajadores.

En lo que concierne a las políticas financieras, sus recomendaciones se centran sobre la importancia de modificar los regímenes de crédito, a fin de facilitar a las pequeñas empresas y los pobres el capital necesario para desarrollar sus actividades.

Finalmente, las políticas fiscales deben abandonar sus pretensiones progresistas en pos de garantizar una recaudación eficaz de los recursos. Para el BID, la progresividad de las políticas públicas deben reflejarse en el uso focalizado de sus recursos, no en el

perfil social de su recaudación.

Además en dicho documento, el BID incorpora como variables explicativas de la desigualdad en América Latina, la geografía y la dotación de recursos naturales que caracteriza a los países tropicales. En este sentido, se muestran determinadas correlaciones estadísticas, que pretenden explicar el comportamiento de los ingresos y su distribución. Así por ejemplo, se afirma lo siguiente:

- Los países con una vasta extensión de tierras agrícolas per cápita son sustancialmente más desiguales que aquellos que tienen relativamente escasa tierra per cápita.
- Los cultivos tropicales se relacionan con una distribución desigual de la tierra y de los ingresos. Las condiciones tropicales reducen los salarios y la productividad de la mano de obra.
- La dependencia de los recursos naturales origina volatilidad en las economías, lo cual desincentiva las inversiones de lenta maduración y muy especial la educación. Esto se combina con una respuesta inadecuada de las políticas que ha tendido a ampliar en vez de absorber los shocks externos.

Estas son algunas de las afirmaciones que aparecen en el documento del BID y donde intentan demostrar como los países tropicales tienen desventajas en su lucha contra la pobreza y la desigualdad.

LOS PUNTOS DE CONTACTO

A continuación, intentaremos, mostrar los puntos de contacto entre las diferentes propuestas que nos proponen estos tres documentos, que reflejan las opiniones de estos organismos internacionales con respecto a las causas que generan mayores niveles de desigualdad y pobreza en el mundo y las posibles vías de solución.

El recorrido que proponen los informes es semejante. Ambos documentos plantean una radiografía de la pobreza y la desigualdad y ambos acercan sugerencias sobre las líneas de acción más efectivas.

En los dos casos asistimos al despliegue de un discurso predominantemente económico basado sobre fuentes de información estadística, que se nutren fundamentalmente de las encuestas de los hogares de la región

En estos Informes, la desigualdad se reduce a un problema de adquisición de ingresos

y se remite sobre todo a procesos individuales, a esfuerzos pasados o futuros de los individuos, no se analiza la situación de las personas en un proceso social mucho más complejo y contradictorio, donde las relaciones económicas estructurales del sistema van generando un tejido social cada vez más excluyente y selectivo.

En este aspecto, se destacan posiciones extremas como las del BID, que asumiendo un fatalismo geográfico, encuentra las causas de la desigualdad en la dotación de recursos naturales y en la ubicación geográfica de los países

Otro aspecto ha señalar, es que en estos informes se destaca el hecho, de que al analizar las causas que provocan las desigualdades y la pobreza, primero se coloca el énfasis en las necesidades no satisfechas (educación, salud, alimentos, vivienda), luego se coloca el acento en las capacidades, las personas que no tienen capacidad para generar los medios con los cuales satisfacer dichas necesidades, fundamentalmente porque no cuentan con el nivel de instrucción suficiente que les permita tener un trabajo bien remunerado. Según este enfoque, el pobre es pobre porque es incapaz de producir sus propios medios, o porque no posee la destreza, o porque teniéndola, no logra conseguir empleo.

Un nivel de educación insuficiente limita las oportunidades de las personas de insertarse en un medio cada vez más exigente, esto reduce sus ahorros y las posibilidades de contar con determinados activos que les permitan ser menos vulnerables a los desequilibrios y tensiones económicas. De ahí parte la propuesta común de estas instituciones de la necesidad de crear “capital humano” como una vía indispensable para romper el círculo vicioso de la pobreza. Como de forma muy acertada señalara Eduardo Galeano "el código ético de la globalización condena el fracaso y no la injusticia"

Por lo tanto los gastos en educación, formación, servicios médicos, etc., son inversiones que producen capital humano y que sobre todo la educación tiene un efecto causal positivo sobre variables como el ingreso y el empleo.

En ambos casos, se le asigna un lugar privilegiado al mercado de trabajo como eje articulador de las relaciones sociales y por ende, como mecanismo de reproducción de la desigualdad. Los principales antagonismos sociales aparecen en términos de enfrentamientos por los puestos de trabajo, las categorías ocupacionales y sus

correspondientes remuneraciones y beneficios sociales, que de lucha de clases. Coinciden al decir que una mayor flexibilidad laboral redundará en mayor empleo, cuando en la práctica, ni la modificación laboral ni la mayor calificación de la fuerza de trabajo alcanzan para crear nuevos puestos de trabajo.

El BID menciona la necesidad de optar por un modelo trabajo intensivo que compita con los países asiáticos y uno capital intensivo que explote las calificaciones de la población. Para el Banco Mundial, el modelo se debe construir sobre la base de “mercados más eficientes para los pobres” e instituciones sociales que protejan los pobres de los diferentes riesgos.

Igualmente inverosímil resulta el argumento del BID de que las mujeres deben volcarse masivamente al mercado de trabajo para garantizar el desarrollo de sus países.

El resultado no ha sido el esperado por el BID:

- ✓ Gran parte del aumento de la población económicamente activa femenina alimentó el ejército de los desempleados.
- ✓ Las ocupaciones en que lograron insertarse evidencian las condiciones más precarias y peor remuneradas del mercado.
- ✓ Sus salarios no se incrementaron sino que compensaron la caída de los ingresos de sus parejas.

Otro elemento en lo que coinciden ambos organismos es en cuanto a la ineficiencia del gasto social, que es explicada exclusivamente por la mala voluntad de los políticos y los técnicos responsables de gestionar el gasto. Cuando realmente, la incapacidad del gasto social responde mas bien a la subordinación de los programas y acciones a un patrón de acumulación que excluye más rápidamente de lo que compensa, al carácter accesorio asignado a la política social dentro del esquema dominante de acumulación.

Otro de los puntos de contacto es en torno a la descentralización o centralización, donde ambos consideran que con el centralismo se opta por soluciones homogéneas ante realidades heterogéneas, lo que conduce a asignar recursos de manera ineficiente y a no solucionar los problemas.

De esta forma, se está evolucionando desde una política social en la que el Estado era el que financiaba e implementaba hacia una política social en la que predomina un fuerte proceso privatizador.

Este nuevo paradigma de política social, adolece de una serie de limitaciones:

1. En primer lugar, abordan los problemas de la desigualdad y la pobreza después de los hechos, no intentan eliminarla, lo que hacen es intentar contenerla para impedir que empeore la situación.
- 2.No enfrentan directamente las fuentes de la desigualdad, siguen tratando estas cuestiones como si fueran problemas sectoriales que pudieran resolverse con un conjunto de intervenciones dirigidas a grupos específicos y con determinadas redes de protección social. Aquí se destaca el discurso de la focalización de la pobreza, donde estas instituciones pretenden concentrar los escasos recursos disponibles en una población identificada y luego diseñar el proyecto o programa para atender determinadas necesidades insatisfechas de los pobres. Estos programas adquieren un carácter asistencialista, sin atacar los factores estructurales que generan la pobreza.
- 3.Una deficiencia general de los programas es su falta de integración y la división que producen entre política económica y política social, ya que esta última aparece como un subproducto del crecimiento económico y del mantenimiento de determinados equilibrios macroeconómicos que deben garantizar mayores niveles de equidad y la reducción de la pobreza.
- 4.Son insuficientes los métodos de evaluación de las políticas sociales implementadas, se hace necesario desagregar el gasto social y analizar quiénes son sus reales beneficiarios, no basta con declarar que ha aumentado el gasto social cuando los más necesitados sean los que menos acceden a los servicios ofertados

De esta manera, los discursos oficiales del Banco Mundial y el BID aunque en apariencia han cambiado en cuanto al manejo de las políticas sociales, en esencia pretenden legitimar un modelo de acumulación neoliberal, que no responde a las necesidades de las mayorías, sino a las necesidades de valorización del capital y que en vez de una mayor integración y equidad en nuestras sociedades provoca mayor fragmentación y exclusión social.

- **BIBLIOGRAFÍA.**
- Banco Mundial. Informe sobre el Desarrollo Mundial 2000/2001.
- BID. América Latina frente a la desigualdad 1998-1999.
- CEPAL: Equidad, desarrollo y ciudadanía. Enero 2000.

- CEPAL: La brecha de la equidad 1999.
- CEPAL. Panorama social de América Latina y el Caribe 1999-2000.
- PNUD. Informe sobre desarrollo humano 2000.
- UNICEF El progreso de las naciones, 1999.
- OIT: Informe sobre el empleo en el mundo, 1998-1999.